



Especial

REPRESIÓN EN CHAPARINA

MARTES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2012 / 8 PÁGINAS

APG



El 25 de septiembre de 2011 los indígenas que defienden el TIPNIS fueron golpeados en Chaparina, Beni.

A un año de impunidad aparecen facturas

● **TIPNIS** El “Plan de Operaciones TIPNIS” demandó alimentos, combustible, agua, tenazas y cintas masking. Este diario publica copias de facturas y contratos con buses a nombre del Ministerio de Gobierno.

Cuatro días después del operativo en Chaparina

El Vice dijo que sabía quién ordenó intervenir

● En ese entonces el Vice afirmó que el Gobierno conocía los detalles de la intervención a la VIII marcha indígena. La Fiscalía nunca lo convocó.

Tras el violento operativo policial contra los indígenas de la octava marcha, ocurrido el 25 de septiembre de 2011, la responsabilidad sobre quién había ordenado la intervención iba de una autoridad a otra, sin saber a ciencia cierta quién fue. Cuatro días después de lo sucedido, el vicepresidente Álvaro García Linera salió a la palestra para afirmar que el Ejecutivo sabía los detalles, pero iba a dejar que la investigación avance.

Tras reiteradas consultas de los periodistas, en una conferencia de prensa, el 29 de septiembre, García respondió la pregunta que durante cuatro días no había tenido respuesta.

“Nosotros ya sabemos lo que ha sucedido (...). Ya hemos hecho internamente un conjunto de averiguaciones (...). Delante de ustedes vamos a averiguar paso a paso y con claridad meridiana, sin especulaciones. Creo que es lo más sano”, manifestó.

La mañana del 25 de septiembre, un contingente policial intervino violentamente a los indígenas que se encontraban acampando en San Lorenzo de Chaparina (Beni), para luego continuar su marcha hacia La Paz en defensa del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécuré (TIPNIS) y en contra de que se construya la carretera Villa Tunari- San Ignacio de Moxos.

Los efectivos golpearon, maniataron y amordazaron a los dirigentes indígenas con cinta adhesiva. Decenas de marchistas fueron obligados a subirse en camionetas para supuestamente retornarlos a sus lugares de origen.

Un día después del operativo policial, el entonces ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, informó que la intervención tenía un orden fiscal, sin embargo, horas después manifestó que la instrucción de intervenir la marcha indígena salió de Marcos Farfán, quien entonces era viceministro de Régimen Interior.

La declaración de Llorenti provocó la renuncia de Farfán que, en una carta, negó haber sido quien ordenó la intervención. “Expreso mi desacuerdo pleno con la forma en la que se procedió a la intervención de la marcha indígena que ha respondido a una decisión operativa y no así proveniente del Órgano Ejecutivo y ni de mi persona”, se lee en una parte de su misiva de renun-



APG

Efectivos policiales reducen a indígenas, en su campamento de Chaparina.

Daniela Romero L. La Paz

Mientras Sacha Llorenti afirmó que hubo una ruptura de mando, el ex subcomandante Óscar Muñoz aseveró que la instrucción se envió desde La Paz.

cia, enviada el 27 de septiembre.

Llorenti dijo que Farfán había renunciado para someterse a la investigación y condenó, después de tres días del operativo, los abusos de los policías contra los indígenas. “Más allá de que si hubiera dado una orden”, no los justificaba. En su defensa, aseveró que hubo una ruptura en la cadena de mando, por lo que ni él ni el presidente Evo Morales conocían sobre el operativo y menos lo habían instruido. Sin embargo, días después del hecho en Chaparina salieron a luz pública diferentes documentos que implicaban planes operativos policiales para la madrugada del 25 de septiembre con el conocimiento de autoridades de Gobierno.

En una entrevista reciente con un periódico local, Llorenti afirmó que García Linera conocía sobre la intervención policial. “Me llamó el Vicepresidente y me dijo: Tengo información de que están interviniendo Chaparina”, contó, según publicó ERBOL, el 3 de septiembre de 2012.

Luego de la renuncia de Marcos Farfán, ese mismo día por la tarde Llorenti convocaba a una conferencia de prensa para informar que renunciaba a su cargo de ministro bajo el argumento de que no quería convertirse “en un

instrumento de la derecha y la oposición que pretende atacar el proceso y dañar la imagen del Presidente”. Añadió que se iba a defender como ciudadano y de manera humilde ante “calumnias”.

En un informe sobre lo ocurrido que entregó Farfán a la Fiscalía, señala que la orden de intervención policial la dio el ex ministro Llorenti y cuando ya había empezado el operativo, el ex subcomandante de la Policía, general (r) Óscar Muñoz, le informó al ex viceministro que la instrucción la recibió “de La Paz”.

Muñoz estaba al frente del contingente policial que intervino Chaparina, por lo que al iniciarse la investigación del Ministerio Público el ex jefe policial fue el primero en ser convocado a declarar y se convirtió en el principal responsable de la intervención violenta.

Pasaron 365 días tras la intervención policial a la octava marcha sin conocer, de parte de la Fiscalía y su investigación, quién ordenó que se realice el operativo. Peor aún, el vicepresidente García Linera tampoco informó hasta la fecha lo que en un principio aseguró: que el Gobierno sabía los pormenores del operativo policial en Chaparina.

Un solo detenido con sustitutivas

El ex subcomandante de la Policía general (r) Óscar Muñoz Colodro es el único que fue imputado por la Fiscalía y pasó por una audiencia cautelar tras la intervención policial a los indígenas, el 25 de septiembre de 2011, en San Lorenzo Chaparina (Beni).

Para que se investigue la violencia con la que se actuó en el operativo policial y otros detalles, se conformó una comisión de fiscales integrada por Patricia Santos y José Ponce. Hasta ahora sólo Muñoz fue el único aprehendido y recibió detención domiciliar. Durante la intervención estaba al frente del contingente de uniformados. Al margen de él, el entonces comandante de la Policía general (r) Jorge Santiesteban y el ex inspector general Edwin Foronda, quien estaba en Chaparina durante el operativo, fueron convocados a prestar su declaración informativa, sin embargo, el Ministerio Público no asumió ninguna acción legal para ellos hasta la fecha.

El ex viceministro de Régimen Interior Marcos Farfán también prestó su declaración y fue imputado por el delito de incumplimiento de deberes en mayo de este año, sin embargo, hasta la fecha no se realiza su audiencia de medidas cautelares. La fiscal Patricia Santos dijo que fue imputado porque Farfán reconoció haber estado en Chaparina durante la intervención policial. No obstante, otros jefes policiales, como el entonces director nacional de Inteligencia y ahora comandante de la Policía, coronel Víctor Maldonado, no fue incluido en la investigación de la Fiscalía. Imágenes de la red PAT lo muestran en Chaparina el día del operativo, por lo que la dirigencia indígena pidió que se lo investigue. Los fiscales anunciaron que se lo convocaría.

Asimismo, el presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García fueron excluidos de la pesquisa.

Así también el ex ministro de Gobierno Sacha Llorenti fue apartado de la investigación porque la Fiscalía argumentó que hubo una posible ruptura en la cadena de mando.

Hasta la fecha no hubo más avances de la comisión, por lo que Santos y Ponce son investigados por retardación de justicia.

Las facturas y recibos pagados por el Ministerio de Gobierno para la logística represiva contra los indígenas del TIPNIS en la localidad de Chaparina (Beni), hace un año, aparecieron. Evidencian la responsabilidad en la represión policial.

A un año de los hechos, Página Siete accedió a un conjunto de copias de estos documentos, que también cursan en las oficinas de los fiscales que atienden el caso y que reflejan los pedidos policiales de masking y los contratos del transporte que pretendió llevar a los indígenas del TIPNIS desde Yucumo hasta Trinidad.

Entre los documentos figura el requerimiento logístico de la Policía Boliviana para el "Plan de Operaciones TIPNIS", consistente en alimentación, combustible, agua, tenazas y las cintas masking con las que se maniataron a los indígenas en la población de Chaparina.

El requerimiento se encuentra firmado por el Tcnl. Henry Terrazas Verduguez y está fechado el mismo 25 de septiembre de 2011 en Yucumo, Beni.

Un dato que resulta revelador es la hora de entrega de ese material por parte de la enviada del ex ministro de Gobierno Sacha Llorenti al teatro de operaciones, la consultora Karolina Vertiz. Según el recibo, la responsable de Gobierno entregó al oficial que firmó la solicitud las tenazas y el masking a las 15:50 del día de la intervención, es decir poco antes de comenzar el operativo.

Como respaldo de la entrega del material de apoyo figura entre los documentos una factura a nombre del Ministerio de Gobierno, también con fecha del 25 de septiembre de 2011, por un valor de 1.543 bolivianos, correspondientes a 20 tenazas de dos marcas diferentes y diez docenas de cintas masking.

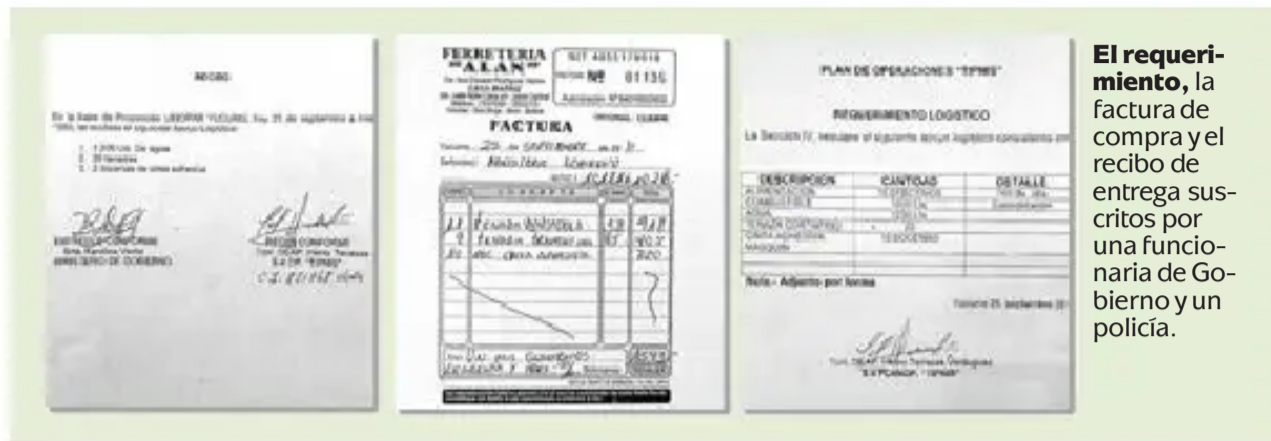
Los documentos que obtuvo Página Siete y que cursan en la Fiscalía de La Paz muestran también el detalle de los contratos de transporte para el frustrado traslado de los indígenas del TIPNIS desde esa zona hasta Trinidad. Estos contratos también están firmados por la misma Karolina Vertiz.

Caso abierto

A pesar de haber transcurrido un año desde los hechos en Chaparina, el Ministerio Público aún no ha establecido las responsabilidades directas en el operativo policial y ha separado de cualquier responsabilidad al Presidente del Estado y al entonces ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, ahora embajador de Bolivia ante Naciones Unidas.

El Ejecutivo insiste en que, durante los hechos, lo que sucedió fue una "ruptura del mando policial", hecho que tampoco ha podido ser verificado por la Fiscalía de La Paz con la sindicación del responsable.

Al respecto, el general Óscar Muñoz Colodro, responsable



El requerimiento, la factura de compra y el recibo de entrega suscritos por una funcionaria de Gobierno y un policía.

El masking usado contra indígenas fue plan de la Policía

Aparecen recibos de la represión en Chaparina

● Una enviada del entonces ministro de Gobierno Sacha Llorenti, la consultora Karolina Vertiz, fue la encargada de pagar la logística represiva.

Página Siete
La Paz

► Como respaldo de la entrega del material de apoyo, figura entre los documentos una factura a nombre del Ministerio de Gobierno, también con fecha del 25 de septiembre de 2011.



Archivo

El masking fue utilizado para amarrar a los marchistas durante la represión policial del 25 de septiembre del año pasado.

Ex director del Ministerio de Gobierno estuvo 10 días antes

Diez días antes de que se realice el operativo de intervención policial en Chaparina, funcionarios del Ministerio de Gobierno se encontraban en la zona para coordinar con la Policía.

Los operadores gubernamentales también tenían contacto con los colonizadores que bloquearon el paso de los marchistas indígenas en Yucumo.

El ex director de Régimen Interior de aquel despacho de Estado, Boris Villegas, era el responsable del seguimiento del conflicto en la zona.

En el informe que presentó a la Fiscalía, Marcos Farfán, ex viceministro de Régimen Interior, reconoce que su ex subalterno se encontraba en la zona con diez

del operativo en Yucumo, en su declaración ante la Fiscalía, señaló que ese 25 de septiembre recibió "órdenes superiores" para la intervención, situación que descarta la supuesta orden de Marcos Farfán, quien entonces se desempeñaba como viceministro de Régimen Interior y que fue la primera versión del Gobierno.

En la misma declaración el jefe policial indica que el día del operativo llamó al viceministro Farfán para comunicarle las órdenes recibidas. Sin embargo, las declaraciones no aclaran hasta ahora el nombre de la persona que impartió la orden final.

El vicepresidente del Estado, Álvaro García, tampoco ha revelado hasta hoy el nombre de la persona que emitió la orden, a pesar de que el jueves 29 de septiembre de 2011 declaró públicamente conocer esta información.

días de anticipación al conflicto. Fue Villegas quien informó al Gobierno del secuestro del cacería David Choquehuana, un día antes de la intervención.

Él y Farfán -según el informe- llegaron a Chaparina en medio de la represión policial y fue desde el celular de Villegas que el ex viceministro reportaba los pormenores de lo que sucedía a Llorenti.

El día de la intervención llegaron otros funcionarios de ese despacho de Estado para cooperar en las labores de logística. Fueron estos consultores los que propiciaron la compra del masking que utilizó la Policía. Villegas está fuera de la lista de investigados por la Fiscalía en el caso.

La calificación de “secuestradores” y una carta del Presidente

La represión policial su

● El 25 de septiembre, los policías lanzaron gases lacrimógenos y dieron golpes

“En cualquier momento nos intervienen”, era la frase que más se escuchaba entre los indígenas de la VIII marcha en defensa del TIPNIS el 25 de septiembre de 2011 en Chaparina. El día anterior, las mujeres de la marcha habían forzado al canciller Choquehuanca a continuar la caminata junto a ellas para romper el cerco policial, que no solamente impedía el avance de los marchistas, sino también el aprovisionamiento de agua en un riachuelo cercano. Después de avanzar unos pocos kilómetros, Choquehuanca decidió abandonar la caminata y retornar a La Paz. El canciller pudo poner en práctica su decisión sin inconvenientes y sin una sola muestra de violencia verbal ni física de los marchistas.

Sin embargo, en La Paz, el entonces ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, ya había calificado el evento como “secuestro”: la excusa para la intervención estaba dada y los indígenas lo sabían.

Una carta y una sospecha

La mañana del 25, la marcha recibió una misiva del presidente Morales. “(...) Evo Morales Ayma los convoca a una reunión el día de hoy, 25 de septiembre, a horas 20:00 pm en instalaciones del Palacio de Gobierno para restablecer el diálogo que ustedes unilateralmente interrumpieron (...) para tal efecto deberán acreditar a 20 representantes de la marcha indígena”, decía textualmente la carta. “Quieren que nuestros dirigentes se vayan a La Paz para intervenir hoy”, repetían los indígenas una y otra vez.

Después del incidente con Choquehuanca, el cerco policial se había trasladado a la entrada de Yucumo, donde un grupo de colonizadores se encontraba realizando un bloqueo para impedir el paso de la marcha. El cerco, según el Gobierno, cumplía la función de “evitar un enfrentamiento”.

Poco antes de la hora del almuerzo, se registraron movimientos del contingente policial.

El advenimiento de la violencia

Alrededor de las 15:30 la guardia indígena abandonó su puesto y se

Amancaya Finkel Ugalde
La Paz

► “Es que el dueño del aserradero que nos brindó espacio para descansar ya nos botó, y no tenemos dónde estar”, informaron esa tarde los policías a Fernando Vargas, presidente del TIPNIS.

Cronología de la intervención y traslado

► Tras haber sido intervenidos por la Policía, los marchistas fueron trasladados por la fuerza. Las regiones aledañas se enfrentaron a uniformados y liberaron a los nativos en Rurrenabaque



alejó aproximadamente 500 metros del campamento en dirección a San Borja, donde la Policía empezaba a cercarlos indígenas. El día anterior se había acordado mantener únicamente el cerco en la entrada a Yucumo. “Es que el dueño del aserradero que nos brindó espacio para descansar ya nos botó y no tenemos dónde estar”, informaron los policías a Fernando Vargas, presidente del TIPNIS. “Les pido que se vayan de aquí inmediatamente”, dijo Vargas. “Será en media hora, debo comunicarme con mi superior”, respondió uno de los policías.

Varios indígenas se encaminaron nuevamente hacia el campamento, al igual que Página Siete. Un minuto después se escuchó un grito de guerra seguido del estampido de los gases lacrimógenos. “¡Al monte!”, gritaron los indígenas. Los policías avanzaron hacia el campamento con gases lacrimógenos y dando golpes y patadas a diestra y siniestra. Varias camionetas cargadas de contingentes

policiales se dirigieron hacia el campamento. En el primer momento de la intervención la Policía impidió el paso de los medios hacia el campamento mismo.

El traslado fallido

Después de aproximadamente una hora, pasaron los buses que habían sido alquilados por el Gobierno con antelación para el traslado de los marchistas a San Borja y después a Trinidad. Los indígenas mostraban por las ventanas las heridas y golpes que habían recibido, así como sus muñecas maniatadas con cinta adhesiva. También mujeres, niños y ancianos fueron brutalmente golpeados.

En el campamento la intervención había concluido y los últimos indígenas, principalmente mujeres y niños, estaban siendo conducidos hacia camionetas policiales.

Los niños no sabían dónde habían llevado a sus padres, madres desesperadas buscaban a sus hijos. Numerosos policías aún se encontraban registrando el campamento y sus alrededores. “Sal-

Fundación Tierra



Miriam Yubanure, vicepresidenta de la CPMB.

Miriam Yubanore:

“Me patearon, les dije que un día pagarán”

“Esa tarde la gente estaba tranquila, pero luego unos hermanos t’simanes llegaron donde nosotros estábamos y nos avisaron que había más policías (en las inmediaciones del campamento) y seguían llegando y nos estaban cercando. Nos avisaron para que vayamos a ver. Era cierto, cuando salimos de la reunión, vimos que estábamos rodeados por los policías, todos armados. Tuvimos una discusión fuerte porque ellos no querían entender. Al final, el coronel que estaba allí nos pidió media hora para que sus agentes dejaran el lugar. Pero antes de que se cumpla ese tiempo ellos nos atacaron.

Como estábamos hablando con los policías fuimos presa fácil de los policías. Nos echaron gases, tuvimos que disparar (huir), pero luego nos agarraron. Cuando me agarraron estaba con otra hermana. No podía creer que así habían ordenado los policías que nos agarraran, que nos dieran palo, nos gasificaran y amarraran. Luché bastante con un policía. En ese forcejeo mi chinela se soltó, me caí, me levanté, quise escapar pero ya me agarró de mi camisa para tumbarme. Ahí también luché, pero vino otro policía y me patearon en el suelo. Ahí me agarraron de pies y manos. Me agarraron porque les gritaba que algún día el Gobierno iba a pagar por las cosas que nos estaban haciendo. (Tomado del libro de la Fundación Tierra)

Fotos: Amancaya Finkel / Página Siete



La Policía empezó a cercar el campamento de la marcha. Los indígenas les pidieron que se retiren de inmediato.



De repente la Policía atacó con gases lacrimógenos, golpes e insultos. Algunos indígenas huyeron hacia el monte.



lente generaron alarma en los indígenas de la VIII marcha peró toda imaginación

es y patadas sin hacer diferencias. También impidieron el paso de los medios.

do de indígenas



gan, no tengan miedo, no les va a pasar nada”, se escuchaba gritar a voces policiales femeninas en tono fingidamente amable. Quienes salieron a entregarse, recibieron una golpiza. En una camioneta de El Deber y periodistas de ese medio, Página Siete dio alcance a los buses. Pero el 25 de septiembre los buses que llevaban a los indígenas cautivos no ingresarían a San Borja. Al saber de la intervención, sus habitantes salieron a las calles y bloquearon todas las entradas al pueblo. Cavaron zanjas, incendiaron llantas, el fuego se veía desde lejos. San Borja estaba dispuesta al enfrentamiento. Los buses tuvieron que dar marcha atrás y dirigirse a Rurrenabaque.

Periodistas del El Deber y Página Siete lograron que la Policía ponga en libertad a un indígena gravemente herido para llevarlo al hospital. San Borja permaneció bloqueada por dos días. Pasaron horas y días de angustia antes de que las familias pudieran reunirse de nuevo.



Atemorizados, los últimos indígenas del campamento fueron obligados a subir a las camionetas policiales.



Los padres de este niño temieron toda la noche por la vida de su hijo. Recuperaron al niño al día siguiente en San Borja.



Al día siguiente, San Borja continuaba bloqueada. Los habitantes temían una posible intervención militar.

La tortura de Franz Tintaya en Chaparina

El 25 de septiembre por la mañana, el joven médico Franz Tintaya se encaminó hacia Chaparina en su campamento. Había recibido la instrucción días antes de sus superiores del Hospital de San Borja. Fue violentamente golpeado.

La Policía no respetó su condición de galeno y atropelló los convenios internacionales de la Cruz Roja. Hoy, Tintaya padece de serios desórdenes postraumáticos. No consigue trabajo y afirma que está “vetado” por el alcalde de San Borja.

“Soy médico”, gritaba Tintaya mientras veía cómo los policías destrozaban la carpa en la que horas antes había atendido a los enfermos. Después lo golpearon sin piedad. “Perro de mierda”, le dijeron y lo maniataron como a un delincuente. Un médico consiguió que fuera liberado en Yucumo. Lo internaron en el hospital, le curaron las heridas. Pero no hay remedios para la humillación ni para el miedo, tampoco para la rabia, la tristeza ni para los malos recuerdos.

Volvió a trabajar pero las convulsiones no se dejaron esperar. Pidió permiso para ir al médico. Primero le informaron que no tenía nada. Sólo en La Paz le dijeron que el electroencefalograma que le habían practicado presentaba anomalías. “Síndrome convulsivo postraumático”;

fue lo que le diagnosticaron. Entonces fue despedido. “Váyase a descansar”, le dijeron.

Gracias a la intervención de instituciones humanitarias ante el alcalde de San Borja lo volvieron a contratar. Pero las secuelas del trauma requerían y requieren aún un control constante y especializado. Poco después, un viernes, se enteró por casualidad que el lunes su puesto sería ocupado por otra persona. Intentó conseguir trabajo en otra parte, en el mismo San Borja, donde vive su familia. Siempre está “a punto” de conseguir un nuevo empleo pero, según cuenta, poco antes de hacerse efectiva la contratación alguien le dice: ¿Qué le ha hecho usted al alcalde del pueblo? Fue tildado de “problemático” y de “racista”.

“Lo que me pasó no se lo deseo a nadie”, sostiene con pesar. Aún se siente débil y espera que con el tiempo pueda trabajar, concentrarse y resistir el cansancio, como antes, para continuar con su carrera como médico que a los 28 años de edad acaba de empezar. Hasta ahora, nadie más le ofreció un trabajo.

La Cruz Roja lo apoyó, al igual que la Asamblea de Derechos Humanos y el Instituto de Terapia e Investigación sobre la Tortura y la Violencia Estatal (ITEI). Por lo demás, nadie le dio nada, ni siquiera un “disculpe señor, por favor”.



El presidente de la Subcentral TIPNIS, Fernando Vargas.

Fernando Vargas:

“No hice nada malo, defendí la casa grande”

“Cuando llegué (a la carretera) y vi que venían filas de policías tras de mí. Había un hombre vestido de blanco que me dijo: ‘A vos te conozco y vos sos responsable de todo esto, vos vas a pagar eso’. ‘Está bien -le respondí- pero también vos vas a pagar lo que vos hacer ahora’.

Luego llegó la Policía y ya nos más veo cómo se lanzaron en contra mía, incluso le hice unas cuantas esquivadas pero me tumbaron, me volví a parar pero me volvieron a golpear y escuché una orden: ‘A este desgraciado hay que matarlo’, después otro dijo que no, ‘deháganle la cara a punta de patadas’, yo lo que hacía era cubrirme la cara y tirarme boca abajo.

Después me patearon un montón. Luego vino un policía y dijo: ‘a éste ya no me lo maltraten’, me tiraron a un carro, me pusieron abajo y uno se paró encima de mí. Con un pie me pisaba en la nuca y con el otro sobre mis manos esposadas.

Me han pisado hasta que la camioneta llegó a la flota y sentí que llegaba otro (marchista), ahí me dije ‘ya no estoy solo, ahora estamos dos’. En ese momento no me sentía preocupado porque yo considero que hasta ahora no hice nada malo, lo único que he hecho es estar acá marchando, defendiendo el territorio, la casa grande de mis hermanos para que no sea destruida por la carretera. (Tomado del libro de Fundación Tierra)

Represión en Chaparina

Los costos del conflicto más difícil y largo del mandato de Evo Morales

Y todo por una carretera...

● La pretendida construcción de la vía por el TIPNIS ya le costó al Gobierno resignar el apoyo de sus referentes históricos, restó fuerza a su discurso y comenzó los roces con Brasil.

Cuando Evo Morales dijo que la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos se construiría "quieran o no", nadie podía imaginar todo lo que provocaría aquella obstinación.

Esa declaración del Jefe de Estado sucedió el 30 de junio de 2011 y, 45 días después, una columna de indígenas partió desde Trinidad con el objetivo de desafiar aquella sentencia.

En el camino a La Paz tropezaron con varios inconvenientes. Frío, calor, amenazas de los sectores sociales afines al Gobierno, calumnias de parte de autoridades oficialistas, un bloqueo de los colonizadores y la violenta represión de la Policía. Exactamente hace un año.

El avance de los marchistas dejó en exposición, de a poco, el empecinamiento de la cúpula gubernamental por construir la carretera interdepartamental.

Poco importó la ruptura de la relación, otrora unificada, con varias centrales originarias de tierras bajas. Tampoco pesaron las críticas de figuras históricas del proceso como Rafael Puente o Antonio Peredo. Menos el alejamiento de algunas autoridades que no estaban dispuestas a ejecutar el proyecto vial.

El Gobierno estaba dispuesto a negociar todo menos la demanda principal.

Después del episodio de Chaparina, los alejamientos se incrementaron. Al menos seis renuncias de autoridades se presentaron después de la represión a los indígenas. Entre ellas la ex ministra de Defensa Cecilia Chacón y la ex directora de Migración María René Quiroga.

Otro que se tuvo que ir por el operativo fue Sacha Llorenti, ahora embajador de Bolivia ante la ONU y que hace un año aún era ministro de Gobierno. Organizaciones de derechos humanos, ex autoridades e incluso la Defensoría del Pueblo pidieron que sea procesado por el caso, sin embargo, la Fiscalía determinó sacarlo de la investigación.

Pese a la represión, la marcha logró rearticularse y llegó a La Paz el 19 de octubre. Una multitud de paceños recibió a la columna y se solidarizó con la causa indígena. Colectivos urbanos de apoyo a la demanda se multiplicaron en todo el país.

El conflicto no ha terminado y todo indica que la sentencia presidencial de junio del año pasado no ha cambiado. El desenlace aún es imprevisible, pero parte del saldo ya es evidente.

Página Siete
La Paz

El avance de los marchistas dejó en exposición, de a poco, el empecinamiento de la cúpula gubernamental por construir la carretera interdepartamental.



El presidente Evo Morales en una concentración a favor de la carretera por el TIPNIS.

La salida de OAS terminó con el crédito del BNDES

La suspensión temporal del proyecto carretero Villa Tunari-San Ignacio de Moxos terminó con la salida de la constructora brasileña OAS y del cierre del financiamiento del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES). La carretera asfaltada Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, de 306 km, tenía un costo de 477 millones de dólares. De dicha suma, 332 millones provenían de un crédito del BNDES de Brasil y 145 millones del Tesoro General del Estado (TGN) de Bolivia.

El presidente Evo Morales, desde su asunción a la presidencia el 22 de enero de 2006, se proclamó como un abanderado de la causa indígena y como defensor de la madre naturaleza. Hasta organizó una cumbre climática hace dos años en el municipio cochabambino de Tiquipaya.

Después de Chaparina, el respaldo ciudadano a la VIII marcha comenzó a debilitar los cimientos del apoyo al Gobierno del presidente Morales.

El discurso de Morales se debilita y baja su apoyo

De la noche a la mañana, Evo Morales dejó de ser el consentido en todos los foros internacionales y perdió su halo de defensor anticapitalista de la Madre Tierra. Sus apariciones en las últimas cumbres globales sobre Cambio Climático fueron una evidencia de ello.

El presidente tuvo que soporitar manifestaciones dentro y fuera del país en encuentros ambientales. Los indígenas del TIPNIS lograron ser parte de foros como la cumbre de Sudáfrica o el Foro Social de Porto Alegre.

La imagen internacional del Gobierno también quedó damnificada. Figuras de la izquierda mundial como el ex presidente de la Constituyente de Ecuador Alberto Acosta hicieron públicos sus reparos al proyecto.

En el mes posterior a la represión, Evo Morales marcó su pico más bajo de popularidad. Una encuesta de IPSOS reveló que pasó de tener 70% de aprobación en enero de 2010 a 35% de apoyo en octubre del año pasado.

Los movimientos sociales observan el proceso

Otra de las consecuencias del conflicto por la construcción de una carretera a través del TIPNIS fue la ruptura de la plataforma de movimientos sociales que fue imprescindible para consolidar a Evo Morales en la presidencia del Estado.

El Pacto de Unidad ahora está conformado fundamentalmente por la Confederación de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), las Bartolinas y la Confederación de Comunidades Interculturales (ex colonizadores). Mientras tanto el Consejo Nacional de Ayllus y Marqas del Qullasuyu se alejó definitivamente del Ejecutivo.

La Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente de Bolivia está fracturada. La facción que conduce Adolfo Chávez se opone a la carretera y se declara abiertamente opositora, mientras que la nueva dirigencia bajo el mando de Melva Hurtado apoya al oficialismo. La elección de esta última es cuestionada por varios sectores indígenas.

Archivo

Además del frío y de los embates políticos

El Gobierno le negó el diálogo a la IX marcha

- Los dirigentes fueron blanco de acusaciones políticas. Fernando Vargas fue destituido por supuesta falta a normas internas.

A l mediodía del 27 de abril de 2012, desde la puerta de la catedral de la ciudad de Trinidad, Beni, y después de haber participado en una misa, partió la novena marcha indígena rumbo a la ciudad de La Paz, sede del Gobierno.

La caminata era una respuesta al retroceso del Gobierno en su compromiso de octubre de 2011 con la octava marcha de no construir la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos por el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécore (TIPNIS).

El Ejecutivo había faltado a su compromiso apelando a la marcha denominada del Conisur, organizada a principios de 2012 por colonizadores, cultivadores de coca y algunos originarios del TIPNIS afines al gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS).

El presidente Evo Morales promulgó la Ley 222 de consulta y dejó abierta la posibilidad de construir la polémica vía.

Una caminata penosa

Los más de 300 indígenas que iniciaron la marcha, entre hombres, mujeres y niños, sabían que les esperaba más de dos meses de una penosa caminata, un trayecto de 600 kilómetros y que tendrían que ascender hasta los más de 4.000 metros sobre el nivel del mar (ellos viven sobre 180 msnm). Además, llegarían a su destino en el momento más duro del invierno altiplánico.

Su partida estaba marcada para dos días antes, para el miércoles 25 de abril, pero un bloqueo en la localidad de San Ignacio de Moxos en Beni, organizado por militantes del MAS, impidió su paso. Ésa fue la primera medida política que intentó frenarla.

No al diálogo

Durante la caminata los indígenas y sus dirigentes fueron blancos de acusaciones, amenazas y constantes negativas por parte del Gobierno al diálogo.

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, llegó a denunciar que Adolfo Chávez, presidente de la Subcentral TIPNIS, recibió 30.000 dólares de una casa de juegos y que la dirigente Bertha Bejarano cumplió una sentencia por narcotráfico en Brasil.

A los pocos días, el mismo Ro-

Página Siete

▶ La caminata comenzó con 700 indígenas y llegó a 1.500.

▶ Permanecieron más de dos semanas en La Paz, durmiendo en las calles.

▶ Tres indígenas murieron por el frío: un bebé y dos adultos.



La marcha, a la salida de Trinidad, Beni.

mero planteó como interlocutores a los 60 corregidores del TIPNIS y de las tres organizaciones del territorio para dialogar, a sabiendas de que los indígenas estaban divididos por influencia de militantes del MAS.

El 29 de junio, Página Siete publicó que desde el inicio de la marcha el Gobierno rechazó por lo menos cuatro invitaciones de diálogo de los indígenas.

Los ataques contra la movilización llegaron a las amenazas. A días del arribo de la caminata a La Paz, colonizadores de Caranavi en Sud Yungas indicaron

que iban a parar la marcha con un bloqueo, pero no cumplieron su amenaza porque los pobladores de la región advirtieron con frenarlos. La Federación de Campesinos amenazó con un cerco si la marcha continuaba, pero tampoco cumplió.

A días de su ingreso a la sede de Gobierno, un motín policial postergó su arribo hasta el 27 de junio. Ante la negativa al diálogo del Gobierno se resignaron a regresar a sus regiones para resistir en el lugar la consulta para la construcción de la carretera por su territorio.

“Armando” la consulta previa

Mientras los indígenas de la IX marcha se dirigían a la ciudad de La Paz, el Gobierno organizaba la consulta establecida por la Ley 222, aprobada durante la presencia en La Paz de los indígenas del Conisur, sector del TIPNIS afín al Ejecutivo que está de acuerdo con la carretera.

La Ley 222 tiene por objeto convocar al proceso de consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas del TIPNIS sobre la construcción de la vía que pasa por su territorio.

El 29 de julio la consulta comenzó en las comunidades de Oromomo y San Miguelito. Los corregidores del lugar denunciaron que se realizó sólo con autoridades afines al Gobierno.

Mientras tanto los indígenas instalaron una vigilia contra el proceso.

Semanas antes del inicio de la consulta, el presidente Evo Morales realizó una gira por las regiones del TIPNIS llevando una serie de obsequios y el Ministerio de Comunicación organizó visitas de periodistas, empresarios y otros sectores de la población al territorio indígena para socializar su proyecto de la vía que atraviesa por una de las reservas naturales más importantes de Bolivia.



Los indígenas atravesando las barreras de la naturaleza.



La caminata en uno de sus últimos descansos antes de ingresar a la ciudad de La Paz. En la foto, el dirigente Fernando Vargas.

Represión en Chaparína

División de criterios

La consulta siembra la división en el TIPNIS

- Comunarios señalan que las posturas contrarias a la construcción de la carretera también afectan a las familias en el Isiboro Sécore.

Miguel A. Melendres / Página Siete

A medida que avanza la consultagubernamental sobre la construcción de una carretera, se percibe una evidente división entre habitantes del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécore (TIPNIS), sobre todo en las comunidades que se encuentran en las riberas del río Isiboro, donde las posturas contrapuestas dividen incluso a muchas familias.

En una visita efectuada a la zona, Página Siete comprobó este extremo. Hay indígenas que apoyan al Gobierno y la implementación de sus programas de desarrollo, como precisamente la carretera que uniría San Ignacio de Moxos con Villa Tunari, pero en muchos casos chocan con posturas contrarias de sus parientes y amigos.

Más de uno comenta que inclusive hay jóvenes que han expulsado a sus padres de sus casas por las opiniones encontradas.

Entre los que apoyan al Órgano Ejecutivo, según cuentan vecinos, están algunos corregidores, comunarios de bajos mandos y profesores que estarían siendo beneficiados con ayuda económica del Gobierno.

“Hay una división notoria acá. Hemos podido observarlo en las últimas semanas. Hay proyectos del Gobierno para dar ayuda a las comunidades, ellos (los dirigentes) son los únicos que saben y no nos informan nada, más bien se separan y desaparecen”, declaró el comunario de Gundonovia Jorge Noco Muibia.

Emilio Teco, vecino de ese mismo poblado, contó que quienes están a favor de la vía viven a escondidas, o bien dejan sus aldeas sin hacer sonar los motores de sus canoas y están por semanas en Trinidad, capital de Beni, para luego volver con grandes cantidades de víveres.

“Pareciera que ellos nomás necesitarán. A ellos les llega cosas, pero el resto de la comunidad no recibe nada. Eso nos preocupa”, manifestó Teco.

En una reunión comunal en Gundonovia, la gente que hace la resistencia a la consulta reconoció que a principios de año el Gobierno cumplió con la comunidad instalando dos depósitos de combustible, pero a la vez criticó que los encargados de la llave de paso vivan en Trinidad y no les reparten el combustible.



Indígenas del TIPNIS resisten el ingreso de brigadas en el río Isiboro.

APG

Página Siete
LaPaz

“Desde que las autoridades gubernamentales ingresaron a las comunidades, que habitan en el territorio indígena, con obsequios y promesas, la armonía de las comunidades se disipa”.

Brigadas gubernamentales ingresan a una comunidad.

“Sólo se reparten entre quienes apoyan la consulta. Otros comunarios han visto sacar el combustible tarde, en la noche”, se comentó en la reunión. La notoria división indígena fue advertida por los comunarios, quienes identifican al Gobierno como el principal culpable de ese hecho. “Repudiamos el comportamiento del Gobierno, que viene dividiéndonos como comunidades y estructuras, hechos que no permitiremos en adelante, así sea ofrendando nuestras vidas”, señala parte de un documento firmado por representantes de 22 comunidades que se reunieron hace dos semanas en San Pa-



Indígenas durante un acto realizado en el parque.

blo del Isiboro para analizar la situación coyuntural.

Según el Gobierno, para el inicio de la consulta en el TIPNIS se logró una concertación con la mayoría de las comunidades que habitan el territorio indígena.

No obstante, los indígenas no tienen la misma percepción, pues desde que las autoridades gubernamentales ingresaron a esa reserva natural con obsequios y promesas, la armonía de las comunidades se disipa.

“Hay gente que está a favor de la consulta en mi comunidad, pero son tres o cuatro, el resto no lo está”, declaró Lorenzo Muitimo, de Puerto San Lorenzo.

Defensor alertó sobre riesgos

“No consideramos que en un Estado de Derecho se tenga que reprimir la libertad a la marcha y la libertad de exigir ciertas demandas”, dijo el defensor del Pueblo, Rolando Villena, el 25 de septiembre de 2011, luego de que las noticias llegaran a la sede de Gobierno.

La autoridad aseguró, entonces, que la intervención a la marcha “pone en riesgo la democracia”.

Yoriko Yasukawa deploró el hecho

El día que se intervino la VIII marcha, Yoriko Yasukawa, representante de la Organización de Naciones Unidas, deploró la violencia que se ejerció en tal acción. “Deploramos profundamente estos hechos de violencia, realmente lo lamentamos porque todo este tiempo hemos venido llamando a que este conflicto se resuelva a través del diálogo, pacíficamente”, dijo a ERBOL.

ONU condenó el uso de la fuerza

El 29 de septiembre de 2011, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Bolivia condenó “el uso excesivo e indiscriminado de la fuerza” de parte de la Policía en el operativo. La institución también saludó, por medio de un comunicado, las declaraciones del presidente Evo Morales de repudio a los “excesos y abusos” de la Policía.

DDHH rechazó argumento oficial

Para Yolanda Herrera, presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, es “inaceptable” pensar que se hubiera roto la cadena de mando en el operativo, pues el ex ministro de Gobierno Sacha Llorenti “era la principal autoridad”. “No es una justificación, como ministro de Gobierno él era la principal autoridad en ese momento”, dijo en junio pasado a este medio.

